

Jevp.
C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, tres de diciembre de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción del párrafo segundo, tercero y final del considerando vigésimo que se eliminan.

Y se tiene además presente:

Que, comparece don Alfonso Véliz Cabello, Abogado, en representación de la parte demandada Esval S.A deduciendo recurso de apelación en contra de la sentencia del Primer Juzgado Civil de Valparaíso de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, que acogió parcialmente la demanda por responsabilidad extracontractual, atendido a que dicho fallo por una parte acogió las tachas deducidas por la demandante en contra de los dos testigos presentados por su representada y además condenó a la demandada al pago de \$7.776.140 (siete millones setecientos setenta y seis mil ciento cuarenta pesos), más reajustes e intereses, por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, todo ello con costas.

Funda su recurso, primero, en cuanto a la decisión sobre las tachas opuestas por la demandante, en relación a los testigos Espinoza y Molina, donde el juez a quo las acogió conforme el numeral 5° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, donde en opinión de esta recurrente acoge las tachas indicadas sin realizar un análisis de fondo de ella, sino que de manera formal, al ser dichos testigos dependientes de su representada. Indica que para acoger las tachas opuestas, al Tribunal le basto simplemente el hecho de que los testigos presentados por su parte fueran trabajadores de la empresa demandada sin más. Estima dicha parte que las normas que regulan la institución de las tachas deben ser



examinadas con detención, por cuanto su acogimiento conlleva consecuencias graves para la parte que lo presenta, siendo necesario evaluar si, en el caso concreto, se produce una real pérdida de imparcialidad de un testigo en atención a las características de su vínculo con la parte que lo presenta, unido a que según dicha parte, de las preguntas de tachas formuladas y sus respuestas no es posible desprender la falta de imparcialidad de los testigos en cuestión, pues no se preguntó a los testigos si tenían algún interés en el juicio así como tampoco se podría desprender que su puesto de trabajo o su remuneración se verían afectados por sus declaraciones o por el resultado del juicio.

Indica además que el derecho laboral permite a los trabajadores gozar de especial protección de sus derechos, evitando que se vean expuestos a presiones o temor de sufrir consecuencias desfavorables si realizan declaraciones contrarias a su empleador. En este sentido, señala que los trabajadores no son simples instrumentos o vehículos de la voluntad de su empleador y, en caso de que éste trate de incidir a su respecto en cualquier forma, los dependientes cuentan con resguardos eficaces para garantizar su libertad en cuanto a su pensamiento, sus declaraciones y, en definitiva, en cuanto a sus actos, como por ejemplo con el ejercicio de una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Unido a ello alega que, es necesario tomar en cuenta la desigualdad procesal y/o de armas que se produce al acogerse la tacha en cuestión, por cuanto en definitiva en su opinión implica que su parte en ningún juicio podría rendir una prueba testimonial que no resulte tachada, por consiguiente, excluida del ejercicio de valoración de la prueba por parte del juzgador. Y al no poder rendir la prueba, el tribunal no puede valorar lo señalado por los testigos en el sentido de lo que la demandada ha insistido, esto es, que el sistema de redes de alcantarillado en nuestro país está diseñado única y exclusivamente



para portear aguas servidas domiciliarias.

Que en relación a la parte del fallo que acogió la demanda en parte por los daños demandados, dentro del régimen de responsabilidad extracontractual, dicha parte señala que, si bien era efectiva la producción del hecho demandado, aquél no era atribuible a culpa de su representada, quien actuó diligentemente. Además, alega que según su opinión se habría configurado a favor de Esval, la eximente de responsabilidad de caso fortuito o fuerza mayor. Por último expone que en subsidio de lo anterior, señala que no existiría relación de causalidad entre el hecho y los daños reclamados por la demandante

En cuanto a la ausencia de culpa, dicha parte indicó que la obstrucción producida obedeció a la incorporación indebida de elementos ajenos a las aguas servidas, cuestión que, contraria lo establecido en la norma NCH1105. Of. 1999 “Ingeniería Sanitaria – Alcantarillado de Aguas Residuales – Diseño y Cálculo de Redes”, la que señala que la infraestructura de recolección de aguas servidas está diseñada y dimensionada sólo para recolectar y conducir aguas servidas domésticas, y no otros elementos extraños. Situación que deviene en imposible de controlar para mi representada y escapa de su responsabilidad, constituyendo estos hechos una situación de fuerza mayor o caso fortuito en los términos contemplados en el artículo 45 del Código Civil en relación con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley General de Servicios Sanitarios, ante lo cual, los testigos de dicha parte, habrían señalado que en el colector de aguas servidas del sector se encontraron elementos indebidos como trapos, los cuales lo obstruyeron y causaron el vertimiento de éstas en el inmueble afectado, señalando que ello habría sido ocasionado por terceros, reforzando la argumentación del mal uso de los usuarios que afecta las redes de recolección de aguas servidas. Por dicha razón, expone que, además, opuso la excepción de caso



fortuito o fuerza mayor. Pero, el Tribunal de primera instancia, al acoger las tachas deducida en contra de los testigos de esta parte, no tuvo por acreditada la intervención de terceros, ni hizo referencia a los trapos encontrados en el colector, lo cual es indicativo de que tampoco existiría relación de causalidad. Unido además, según dicha parte que acompañó una serie de documentos, no objetados por la contraria, demostrativos según ella de su actuar diligente, lo que el Tribunal tampoco los apreció en este sentido, limitándose a referirse a ellos únicamente para dar por establecido el hecho de rebalse del colector de aguas servidas.

En cuanto a las partidas de daños demandado, expresa dicha parte que el tribunal a quo acoge en parte lo peticionado por la actora en su demanda estimando que no procede, pues el fallo impugnado, sólo se limita a señalar que de los documentos acompañados por la demandante (como listado de objetos dañados, cotizaciones y presupuestos de las reparaciones y fotografías del estado de los daños) tiene por establecido que se produjo esta partida de daño y se concede en el monto resuelto. Por consiguiente, señala que son insuficientes las cotizaciones y presupuestos presentados por la actora para dar cuenta de gastos en que haya incurrido, sino que sólo dice relación con una estimación de gastos, sin acreditar de manera alguna un efectivo desembolso económico.

Asimismo, tampoco serían útiles las fotografías sobre el estado de los daños acompañadas por cuanto en estas no existe ninguna firma o estampe de ministro de fe alguno, que certifique que las imágenes fueron capturadas en el domicilio de la demandante. Al no contar con certificación de un ministro de fe, no podría el tribunal tener por acreditado que las imágenes fueron capturadas el día de la emergencia que genera el juicio de autos ni que es el domicilio del actor que habría sufrido daños, no constándole a dicha parte si fueron tomadas en una fecha posterior al de la emergencia o en un



inmueble distinto al de autos.

Por su parte, relata, que los testigos ofrecidos por la demandante tampoco harían mención precisa a los daños que reclama, sino tan sólo una mención general a “muebles, alfombras, refrigerador, camas” sin avaluar en monto alguno dichos daños, al tenor del punto de prueba N°6 que se refiere precisamente a ello.

Que, a su vez, la demandada señala que en relación al lucro cesante el tribunal, tuvo como prueba suficiente la testimonial rendida por la demandante, que corresponde a la declaración de los dos testigos presentados por ésta, correspondiendo a doña Carmen Luz Barrera Núñez y Loreto del Carmen Barra Guzmán. La primera solamente se refirió a que *“en la casa había una persona que arrendaba una pieza y se fue debido al daño que sufrió su habitación y sus cosas”*, no haciendo referencia a nada más respecto al supuesto arrendamiento. Por otra parte, la segunda testigo, Loreto Barra, declaró ser la persona que arrendaba la habitación de la causa del demandante, por la cual pagaba un canon de \$150.000 mensuales, desde enero de 2017 hasta junio del mismo año y que no obstante, la escueta información aportada por los testigos el tribunal condenó a su representada a la totalidad de lo solicitado por la demandante en cuanto a esta partida de daño. Estima dicha parte que se incurrió en un error, por cuanto sólo uno de los testigos -la misma arrendataria- aludió al canon de arrendamiento y periodo de vigencia del contrato, mientras que el otro solo se limitó a mencionar que había alguien que arrendaba una pieza en la casa del demandante, lo que cree que no es suficiente para dar por acreditado dicho hecho.

Por lo que, en relación a la determinación del lucro cesante y, de conformidad con lo establecido en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, estima que sólo existiría la declaración de un testigo que, en su opinión no puede ser considerado imparcial, a pesar del rechazo de la tacha por parte del tribunal de primera



instancia, decisión que igualmente se impugna mediante este recurso de apelación. Expresa que su declaración sólo podría constituir una presunción judicial, la que no tendría los caracteres de gravedad y precisión suficiente que exige el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en orden a constituir plena prueba respecto a su contenido.

Que, continuando dicha parte, fundando su apelación, expone que en cuanto al daño moral, el Tribunal de primera instancia lo acreditó con la prueba testimonial de la demandante y considera que ello no está probado, por no hacer referencia alguna al daño moral reclamado, insistiendo dicha parte en la ausencia de prueba del actor respecto al daño moral, expresando que no existen daños morales evidentes, pues tampoco se presumen, y que, tanto los tribunales como la doctrina han exigido su prueba.

Que, por su parte, la demandante, don Christopher Estay Varas, en representación de don Alejandro Costela González, se adhirió a la apelación, reclamando por las partidas de daño emergente y de daño moral. Indica que respecto de la primera partida no existe mayor análisis respecto de la prueba aportada por dicha parte destinada a acreditar el Daño emergente reclamado, donde la suma otorgada por el Tribunal por concepto de daño emergente ascendente a **\$1.726.140**, es la misma que la parte demandada, antes de judicializarse esta causa, ofreciera a su representado mediante correos de fecha 08 de agosto de 2017, acompañados por dicha parte con fecha 24 de noviembre de 2018. Señala que acompañó variada prueba en orden a acreditar la existencia y quantum del daño emergente reclamado, como 29 fotografías que darían cuenta de la inundación en la propiedad de su representado y de los daños ocasionados, unido a prueba testimonial sobre la inundación los daños sufridos, así como prueba documental relacionado a presupuestos por los daños ocasionados, señalando que



estos daños si son reales y fueron efectivamente realizados

Por otra parte, respecto del daño moral indica que dicha parte demandó la suma de \$10.000.000, por verse afectado su representado, su cónyuge y sus hijos a un sentimiento de molestia, angustia y frustración, así como verse expuesta la seguridad e integridad no solo de su persona sino de todo su grupo familiar.

Que, ambas partes solicitan que se dé lugar a sus pretensiones revocando el fallo en las partes que les causa agravio.

I.- En cuanto a la apelación respecto a las tachas de testigos.

Primero: Que, la demandada, impugna la decisión del Tribunal a quo sobre la tacha acogida por dicho Tribunal, respecto de sus testigos don Rodrigo Antonio Espinoza Carrasco y don Joaquín Antonio Molina Henríquez conforme el artículo 358 en sus numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, conforme a los argumentos ya señalados en la parte expositiva de este fallo.

Segundo: Que, es un hecho no controvertido que dichos testigos son dependientes de la demandada, al tener un vínculo de relación laboral existente entre dichas personas con esa parte, conforme la propia apelante lo expresa en su apelación.

Tercero: Que el artículo en el cual se funda la tacha señala lo siguiente:

“Art. 358 (347). Son también inhábiles para declarar:

4º. Los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente.

Se entenderá por dependiente, para los efectos de este artículo, el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa;



5º. Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio;”

Cuarto: Que intentando un concepto, las tachas es la forma que la ley otorga a las partes de un litigio, a fin que puedan hacer valer en el juicio, las inhabilidades que puedan afectar a uno o más testigos de la contraparte que ésta haya presentado a declarar.

Quinto: Que, en el caso en comento, los dos testigos caen dentro de la causal del N° 5 del artículo mencionado y de lo cual a su vez la apelante no lo refuta, en orden a ser empleados de dicha parte, por lo cual mayor prueba para establecer que se configura la causal no es necesaria.

Sexto: Que, de acuerdo a ello, entiende esta I. Corte que conforme a la relación de dependencia y subordinación que tienen los testigos referidos con la parte demandada, que es su empleadora, se coloca en la situación de inhabilidad que de manera imperativa refiere el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil señalado, al establecer que “son inhábiles para declarar...” por cuanto el legislador establece una presunción legal de falta de credibilidad, imparcialidad y verosimilitud respecto de ciertas personas, en virtud de su relación entre sí, presunción que no ha sido desvirtuado por la apelante, por lo cual no se acogerá su apelación en este punto.

Séptimo: Que, hay que tener presente que en la apelación deducida por la parte demandada, también impugnó la tacha deducida por dicho interviniente y que no fue acogida, en relación a la testigo doña Loreto del Carmen Barra Guzmán, presentada por la parte demandante, de conformidad a lo dispuesto en el N°7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

Octavo: Que, la norma en que funda la tacha, señalada en el considerando precedente, indica lo siguiente:



‘Art. 358 (347). Son también inhábiles para declarar:

7º. Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren.

La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias.”

Noveno: Que, la testigo antes mencionada, de acuerdo a sus propias declaraciones en que niega toda enemistad con la parte demandada durante el desarrollo de la audiencia en que se rindió la prueba testimonial, unido a que la apelante no presenta alguna probanza para apoyar su argumento impugnatorio, deriva en que no es posible establecer la enemistad alegada por la dicha parte, pues no hay probanza de hechos graves que den cuenta de dicha causal, por lo cual, no se acogerá la apelación sobre esta materia.

II.- En cuanto a las apelaciones por las indemnizaciones establecidas por el Tribunal a quo.

Décimo: Que, conforme la armonía que debe existir en la interpretación del sistema jurídico civil en su conjunto, conforme a las normas contenidas en los artículos 2284, 2314 y 2319 del Código Civil, podemos establecer que los elementos de la responsabilidad extracontractual son los siguientes:

- Acción u omisión del agente activo.
- Capacidad delictual o cuasi delictual del sujeto activo o a quien se imputa el hecho.
- Dolo o culpa en el actuar de dicho sujeto activo.
- Perjuicio o daño ocasionado.
- Relación de causalidad entre el actuar u omisión y el hecho dañoso producido.



Undécimo: Que la discusión, en relación a los elementos de dicha responsabilidad está dada por la existencia de culpa de parte de la demandada en el hecho que se le imputa.

Duodécimo: Que, en relación al caso fortuito o fuerza mayor alegado por la demandada, conforme los argumentos referidos en la parte expositiva de esta sentencia, esta I. Corte estima que no se dan los presupuestos de aquellas situaciones de exención de culpa que la demandada alega. Como ya mencionamos respecto del hecho de la inundación en el domicilio de la apelante ESVAL no lo refuta, y dichos hechos son consistentes en *“...la inundación ocurrida el día 25 de junio de 2017, en el inmueble que habita junto a su familia, ubicado en calle Carlos Arancibia N°2588, Población Canal Chacao, Quilpué; la que se habría producido a raíz de una obstrucción en el alcantarillado”* como señala el considerando decimosexto de la sentencia del tribunal a quo.

Que en relación al caso fortuito o fuerza mayor que es aquel imprevisto al que no es posible resistir, como lo señala el artículo 45 del Código Civil, conforme lo cual, debe ser probado, y ello no lo ha sido por la demandada, en orden a algún imprevisto o la acción de terceros que hayan ocasionado esta obstrucción de alcantarillado, como alega la demandada y que está bajo la supervisión de dicha parte, ya que como podemos revisar del artículo 34 y el inciso primero del artículo 35 del DFL 328 correspondiente a la Ley de Servicios Sanitarios, expresan:

“Artículo 34° El prestador estará obligado a controlar permanentemente y a su cargo, la calidad del servicio suministrado, de acuerdo a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad normativa y del Ministerio de Salud.

Artículo 35°



El prestador deberá garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor.”

Por ende, corresponde a dicha parte apelante, el supervigilar la adecuada mantención y en calidad óptima del alcantarillado a la demandante, y que debido a la falta de ella se generó la inundación reclamada, sin que se hubiera probado la existencia de algún episodio que generara la fuerza mayor o caso fortuito alegado, por lo cual se desecha tal argumentación. Unido a lo anterior, esta la declaración de los dos testigos de la demandante Barrera y Barra, que señalan como fueron testigos de la inundación, indicando que se produjo desde la cámara de agua, ubicada en la calle, y que ello se debió a que ésta estaba tapada. Refieren que por lo anterior salía el agua desde la taza del baño del inmueble del actor, inundando dicho bien raíz, a una altura alrededor de quince centímetros. Ante esta situación exponen que ese día, de los hechos llamaron a ESVAL, apareciendo uno de sus trabajadores después de cinco horas de ocurrido el incidente.

Que de acuerdo a ello, no se puede establecer una ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor en estos hechos que causaron el daño reclamado de acuerdo al mérito de la prueba agregada válidamente en la causa.

Decimotercero: Que, en cuanto al daño emergente, de acuerdo a la Jurisprudencia y doctrina puede señalarse que corresponde al empobrecimiento real y efectivo padecido por quien pide que se le indemnice, derivado del hecho que produce daño dentro de la responsabilidad extracontractual.

Decimocuarto: Que, uno de los caracteres que determinan esta partida está dada por su determinación clara y definida al momento de ocurrir el hecho que produce el daño fundamento de la indemnización. Y en este caso no es posible determinar aquello con la claridad suficiente para poder establecer una suma determinada de



dinero. Lo anterior se apoya en que para otorgar este tipo de indemnización por daño directo, la sentencia de primer grado se basa en los documentos que acompaña el actor, y ellos están dados por un comprobante de sanitización de empresa Truly Nolen de 04 de julio de 2017, sin establecer un monto determinado, un documento en formato pdf con listado de muebles y electrodomésticos y su cotización, sin fecha y sin indicar su procedencia, otro documento pdf con fotos de muebles y su correlato con el valor de ellos nuevos, sin indicación de cuál es su procedencia, dos presupuestos de empresa constructora CBF de 20 de enero de 2018 sobre cerámica y tabiquería, un presupuesto de reparación de paredes de Constructora Yáñez, sin fecha y una serie de fotos de lo que se indica por el actor que serían los muebles y elementos afectados pero sin algún estampado de algún ministro de fe a su respecto.

Que, como se observa, por una parte tenemos una apreciación de daños que hace la misma demandante, en relación a objetos nuevos, y otro documento donde no se sabe de dónde hace esa relación, así como una indicación de haber hecho una empresa una sanitización, más presupuestos que se refieren a fechas de enero de 2018 y otro sin fecha. Por otra parte las fotografías acompañadas dan cuenta de una serie de artículos pero no de su monto. Y lo que es más importante, dichos documentos no tienen un correlato claro y directo en cuanto a si fueron efectivamente dados por los muebles y daños alegados por esta inundación, pues los testigos hacen una relación vaga al respecto pero sin indicar montos o reconocer o introducir los presupuestos señalados y dichos documentos no relacionan su monto con el hecho demandado, razón por la cual esta I. Corte no puede establecer al respecto una suma de dinero a cancelar, si no existe la debida prueba que pueda fundar y motivar aquella, razón por lo que se acogerá en lo apelado en esta parte la pretensión de la demandada y no se acogerá la petición de la demandante.



Decimoquinto: Que, este caso la partida por lucro cesante, la podemos definir como señala el profesor Peñailillo, como *‘la ganancia esperada que no se obtuvo debido al incumplimiento del contrato o al hecho dañino’* (PEÑAILILLO-ARÉVALO, DANIEL. (2018). SOBRE EL LUCRO CESANTE. *Revista de derecho (Concepción)*, 86(243), 7-35. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-591X2018000100007>)

Decimosexto: Que en este caso, el lucro cesante, deriva de la existencia de un contrato de arrendamiento, suscrito por parte de una tercera persona - doña Loreto del Carmen Barra Guzmán - respecto de una de las piezas del inmueble perteneciente a la demandante. De la declaración, de la propia arrendataria a folio 50 del expediente de primera instancia, ratifica la existencia de dicho contrato, manifestando que con el actor acordaron que iniciaría desde enero de 2017, con un canon de renta de \$150.000.- mensuales, el cual tuvo que cesar en el mes de junio de 2017 atendido a que por la inundación, no podía seguir habitando ahí con su guagua.

Decimoséptimo: Que, como se advierte, el contrato de arrendamiento es de carácter voluntario y conforme con la propia declaración de la arrendataria da cuenta de su existencia entre ella y el demandante. Dicha arrendataria es una testigo sin tacha declarada, dando cuenta de su existencia y elementos fundamentales, y sin prueba que la refute, por lo cual estima esta I. Corte que reúne los requisitos para ser tenida como testigo imparcial y verídico, conforme el artículo 384 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, teniendo así el valor de presunción judicial conforme el artículo antes mencionado, y que de acuerdo a lo ya referido se estima que tiene caracteres de gravedad y precisión suficientes para tenerla como plena prueba conforme al artículo 426 del cuerpo legal citado. Unido a ello está la declaración de la otra testigo de la demandante de apellido Barrera, que en apoyo a ello señala que efectivamente sabía de este arriendo.

Decimooctavo: Que, determinada la existencia del contrato, del canon de arrendamiento y de la especie arrendada, es correcta la



interpretación que hace el tribunal de primera instancia en orden a que si no hubiera ocurrido el hecho de la inundación ya señalada, se hubiera mantenido el contrato de arrendamiento, lo que produjo una pérdida de ganancia esperable, debido justamente a este hecho dañoso por lo cual su extensión en el tiempo se vio truncada por esta situación, y al no tener un plazo determinado de duración, se estima que su reclamo está dado hasta la interposición de la demanda de esta causa, es decir siete meses, por lo cual la suma otorgada está dentro de lo esperable y medianamente seguro que iba a obtener como ganancia el actor, por lo cual no se acogerá la apelación de la demandada en este punto.

Decimonoveno: Que, en relación a la indemnización del daño moral, estima esta I. Corte que es la respuesta resarcitoria a la violación de la dignidad de la persona, como conjunto de atributos personales.

Vigésimo: Que, de acuerdo a la prueba rendida en autos, si bien esta I. Corte considera que la prueba testimonial no da un mayor acercamiento respecto del pretium doloris o aflicción o afectación a la salud psíquica o física de la demandante, así como tampoco es posible extraerla de los demás medios de prueba acompañados al juicio, ello no obsta a poder establecer como un hecho notorio y público, que el verse afectado una persona y su grupo familiar por una inundación con fecas en su casa, como quedó establecido, en la causa, determina una afectación normal a la integridad de las personas, por verse afectada en su vida cotidiana por esta razón, unido a la imposibilidad por un tiempo indeterminado, de uso del inmueble como resguardo de las personas, por la inundación en sí, y por el olor desprendido de las heces, lo cual es una situación que determina una afectación como la aducida por el actor, y por ende merece una reparación integral al respecto conforme el artículo 2314 del Código Civil, por lo cual se dará lugar a dicha partida estimando que la apreciación que hace la sentencia de primer grado es adecuada para dicha indemnización. Por



ello, en este ítem, no se dará lugar a lo solicitado ni por el actor ni por la demandada en sus apelaciones.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que se confirma la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve dictada en la causa rol C- 211-2018, por el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, en cuanto rechazó la tacha deducida en contra de la testigo doña Loreto del Carmen Barra Guzmán.

II.- Que se confirma la sentencia apelada ya referida, en cuanto acogió la tacha del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, respecto de los testigos de la demandada, don Rodrigo Antonio Espinoza Carrasco y don Joaquín Antonio Molina Henríquez.

II.- Que se revoca la sentencia antes señalada, en cuanto concedió la indemnización por daño emergente en la suma de \$1.726.140 (un millón setecientos veintiséis mil ciento cuarenta pesos), estableciendo que no se hace lugar a dicha partida de daños.

III.- Que se confirma en lo demás la sentencia ya indicada.

IV.- Que no se condena en costas a las partes por no haber sido totalmente vencidas y por haber tenido motivo plausible para litigar.

Acordada con el voto en contra del Ministro (s) Espinoza, quien estuvo por revocar la sentencia ya individualizada, sólo en cuanto estableció una suma a indemnizar por daño moral, por cuanto considera que dicha partida al igual que las demás requiere de prueba, que en este caso corresponda a la aflicción, dolor o afectación a su dignidad, experimentado efectivamente por el actor o su familia que habita en el inmueble afectado por esta inundación, lo cual estima que no ocurre en este caso, al no dar cuenta de ello ni los testigos ni los documentos respectivos acompañados al juicio, por lo cual deviene en



que debido a ello no se encuentra comprobado la existencia de esta partida a juicio de dicho sentenciador.

Redacción del Ministro Suplente don Erik Gonzalo Espinoza Cerda.

No firma el Ministro Sr. Droppelmann, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal, no obstante, haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo.

N°Civil-3405-2019.

En Valparaíso, tres de diciembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





WXVNHMTMSX

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Alvaro Rodrigo Carrasco L. y Ministro Suplente Erik Gonzalo Espinoza C. Valparaíso, tres de diciembre de dos mil veinte.

En Valparaíso, a tres de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>